

sente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. Sandoval y Bülle, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de Guaymas, de la cantidad de catorce pesos sesenta y dos centavos por derechos de introduccion de una caja de rebozos que recibieron en el pailebot "Pacífico" el 22 del pasado Mayo.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique, Landa* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el subteniente de Infantería de línea, C. Julio N. Abdalá, en calidad de defensor del procesado Emigdio Guerrero, sargento 2º del Batallon número 3, contra la sentencia de muerte á que lo condenó el Jurado militar de la plaza de ese Estado, por el delito de insubordinacion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el sargento Emigdio Guerrero, del Batallon número 3,

TOMO VI.—PARTE II.

por medio de su defensor el C. subteniente del mismo cuerpo, Julio N. Abdalá, solicitó por su escrito de 27 de Marzo último, que la Justicia federal se sirviera ampararlo y protegerlo contra la sentencia ejecutoria que pronunció el mismo día el jurado militar, imponiéndole la pena de muerte por el delito de insubordinacion que se le atribuye haber cometido respecto del subteniente de su compañía C. Mário de J. Villegas, fundándose en que dicha pena no es aplicable al caso, segun ofreció que demostraría en otro libelo; pidiendo el amparo correspondiente, y que se suspenda desde luego la ejecucion de dicha pena hasta que se pronuncie el fallo en este juicio. Y habiéndose accedido á la referida suspension, se presentó por el actor el ocursó que ofreció, ampliando los fundamentos de su queja; y pedido el informe correspondiente á la autoridad militar, fué emitido en oficio de 1º de este mes, haciendo relacion de lo ocurrido, con los fundamentos de la sentencia pronunciada.

Examinada la actuacion y la causa formada al quejoso, resulta con evidencia que la pena de muerte que se le ha impuesto por el Jurado militar, separándose del dictamen del C. Asesor, es contraria á lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitucion federal, que otorga las mas preciosas garantías individuales, pucsto que aseguran la vida del hombre, y entre ellas la de que la pena de muerte queda limitada por ahora á los delitos graves del orden militar.

Basta la simple lectura del proceso para convencerse de que el sargento Guerrero no ha cometido el delito que se le atribuye, por que en su comprobacion no existe la prueba plena que la ley requiere, y por lo mismo merecía la absolucion con arreglo al espíritu de la última parte del artículo 24, que abolió la práctica de absolver de la instancia; pero suponiendo por un momento que hubiese cometido alguna falta, esta sería disimulable por el estado de embriaguez en que se encontraba el procesado; mas por los términos en que se produjo contestando

al subteniente de su compañía, no puede hallarse delito alguno, y mucho menos de la gravedad que quiere la Constitución, para que pueda imponerse la terrible pena de muerte, toda vez que su mente ha sido abolirla para todos los delitos y establecer el régimen penitenciario, quedando solamente vigente para los delitos atroces y de mucha gravedad. Si el Jurado militar no hubiera pasado desapercibida la disposición del artículo 23 ya citado, y la del 13, que también limitó los casos de delitos y faltas del fuero de guerra á lo que determina con toda claridad la ley orgánica respectiva, habría adoptado sin duda alguna, el fundado parecer del C. Asesor, imponiendo una pena ligera al citado Guerrero; no ya para castigarle un delito que no ha cometido, sino para ejemplo de la clase de tropa, que siempre es conveniente que guarde el debido respeto á sus superiores.

Mientras se expide esa ley orgánica por el Congreso de la Unión, promulgó el Supremo Gobierno la de 15 de Setiembre de 1857, que en su artículo 2º fracción 1ª expresa con generalidad cuales son los delitos y faltas del fuero de guerra, sin hacer distinción entre los que se deben considerar como leves ó graves. Por consiguiente esa calificación corresponde al buen criterio de las autoridades á quienes está cometida la observancia y exacto cumplimiento de la Constitución y leyes, en lo concerniente al servicio militar.

Tampoco fué atendida por el Jurado la circunstancia atenuante de alguna embriaguez del acusado, que concurrió en el caso y que se hubiera tenido como agravante si fuese consuetudinaria, al contrario de lo que las leyes disponen respecto de paisanos.

También es de atenderse y no lo fué por el Jurado, la otra circunstancia muy atenuante que obra en favor de Guerrero, y consiste en que por su hoja de servicios consta que los ha prestado en la milicia siete años, dos meses, diez y siete días, de modo que ha servido mas de dos años despues

del tiempo que le marca la ley, alegando el intercedido que no se le ha dado de baja á pesar de haberlo solicitado. En consecuencia, se le ha detenido en ese servicio sin su pleno consentimiento contra lo prevenido en el artículo 5º constitucional, y aunque el C. Comandante militar ha informado que por ese motivo la ordenanza no releva de castigo al soldado que comete una falta ó delito, eso no es bastante para que la Justicia federal deje de tomar en consideración toda violación de garantía individual, para el efecto de conceder el amparo que se solicita cuando se alega lo conducente durante el juicio.

Por cuyos fundamentos legales, pido á V. que en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Carta fundamental de la República, y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se sirva amparar y proteger al sargento 2º del Batallón número 3, Emigdio Guerrero, contra el procedimiento militar seguido contra él y pena de muerte que se le impuso, sin perjuicio de la pena correccional á que se haya hecho acreedor por la embriaguez y falta de moderación con que hubiese contestado á su jefe.

H. Veracruz, 28 de Abril de 1874.—
Lic. José María López de Escalera.—Una
rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Veracruz, Mayo 8 de 1874.—Vistos estos autos promovidos por Emigdio Guerrero, sargento 2º del Batallón número 3, en solicitud de amparo, contra los procedimientos del jurado militar de esta plaza, que habiéndolo procesado por insubordinación, lo condenó á la pena capital, violando de este modo en su persona, las garantías consignadas en los artículos 13, 14 y 23 de la Carta fundamental de la República. Visto el informe producido por la Comandancia militar, del cual resultan confirmados los motivos en que se fundó Guerrero para pedir el amparo, cuyo recurso lo amplió despues se-

bre el hecho comprobado así mismo, de su retención forzada en el servicio de las armas, contra lo dispuesto en el artículo 5º de la propia Carta fundamental. Vistas las pruebas rendidas por el quejoso y el C. Promotor fiscal, y lo alegado por ambos en definitiva, con todas las demás constancias de autos.

Considerando: que de lo actuado aparece: que Emigdio Guerrero en su calidad de sargento 2º del expresado Batallón, ha sido juzgado por los hechos constantes en el parte del Gefe de la escolta del Ferrocarril de Veracruz á México, los cuales consisten según el relato del propio Gefe, en faltas de subordinación y de respeto al subteniente C. Mario de I. Villegas, en el acto de reconvenirle por su negligencia y descuido en portar la fornitura, y ordenarle que se la acomodase debidamente, cuyas faltas fueron tenidas por el jurado, en la consideración de delito grave del Orden militar, con la circunstancia agravante de negativa reiterada del procesado á obedecer; por lo que, y atendiendo á lo prevenido en el artículo 7, trat. 8º, tit. 10 de la Ordenanza general del ejército, lo condenó á la pena de ser pasado por las armas; pero habiéndose pedido la inmediata suspensión de la ejecución de esa sentencia, se ordenó así por este Juzgado, hasta la resolución del recurso.

Que examinando atentamente estos hechos que han servido de base al proceso, no puede el ánimo judicial persuadirse de que hayan pasado en los términos de gravedad que se imputan al quejoso.

Que la prueba que el jurado ha tenido presente para condenar, está reducida á la de presunciones mas ó menos débiles, insuficientes para conocer en toda su extensión la verdad de los mismos hechos y determinar la responsabilidad consiguiente, sobre todo, cuando las escepciones alegadas por Guerrero, están comprobadas en términos, que si no lo excusan absolutamente de su proceder, si lo relevan de la mayor gravedad que se supone en su falta.

Que determinando en justicia el verdadero concepto de los hechos, estos no importan sino una simple falta que Guerrero cometió al subteniente Villegas, por cuanto en el estado de embriaguez en que se encontraba, parece que ha replicado en alguna manera sus órdenes, sobre compostura del vestuario; y lo expuesto se confirma por las constancias de la causa que se le instruyó al quejoso, pues allí se vé con claridad y evidencia, que reconvenido por el dicho subteniente, contestó en términos de poco acuerdo, debido sin duda al trastorno que le ocasionó la misma embriaguez; mas como no arreglase su vestuario con brevedad y exactitud, Villegas se irritó, y denostándole acremente, le dió de bofetadas delante de la tropa, en contravención á las leyes militares que prescriben el respeto y consideración del Gefe al soldado, añadiendo á esas injurias, la vejación de que se le enseñara á vestir por un soldado de la propia escolta que llamó á ese fin, sobre cuyo abuso, la Comandancia militar, en fiel cumplimiento de su deber, ordenó formación de causa contra el dicho subteniente.

Que no obstante la injusticia de ese proceder violento é irrecusable, Guerrero se limitó á llamar la atención de Villegas, en punto á la clase que representaba en el Cuerpo, y sobre la circunstancia así mismo de que se hallaba de facción, en cuya virtud y en la de que no venia tampoco á sus órdenes, sino á las inmediatas del teniente C. Onesíforo Díaz, le hizo notar que no tenia derecho para maltratarlo, sin que por otra parte conste, que se hubiese mostrado inobediente, ni produciéndose con insolencia y altanería, todo lo cual se acredita con las declaraciones eontestes de los individuos de la escolta, que presenciaron el suceso y abonan la conducta de Guerrero en el particular.

Que á este propósito, no puede decirse que se insubordina el subalterno que mirándose atropellado por su superior, invoca las consideraciones á que tiene derecho, ni tampoco por este motivo se rebaja la disciplina

militar, que si bien exige de parte del soldado respeto y obediencia á sus gefes, no excusa á estos de guardarle á aquel las atenciones que le son debidas, no solo en su clase de soldado, sino como hombre, bajo cualquier condicion; y esto así, en el caso que se juzga, no hay delito de insubordinacion, porque este no lo constituyen hechos de la naturaleza que los referidos, los cuales ni en el supuesto de que hubiesen tenido lugar en la manera que los estimó el Jurado, se justificarían sino por datos, que formando una prueba plena segun la ley, convencieran de su existencia, y no por simples presunciones ó indicios que no pueden prevalecer respecto de aquella.

Que sentados estos precedentes, y aun concediendo que el delito de que se trata, fuese el de insubordinacion, nunca bajo el aspecto que se le ha considerado, pudiera conceptuársele delito grave del orden militar, por el que su autor mereciese la pena de muerte, sin que obste la terminante prevencion de la Ordenanza, que á ese fin no distingue casos, porque el rigor de esta ha venido á moderarlo la Carta de 1857, que estableciendo la distincion debida de penas, reserva la de muerte, para los delitos graves del orden militar, acerca de los cuales, y mientras no se expida la ley orgánica que determine los delitos graves y los distinga de los que no lo son, al Juez corresponde calificarlos para juzgar de los casos ocurrientes á imponer en cada uno una pena proporcional y justa.

Que todo acto que se separe de esa regla á que los Jueces deben sujetarse, es contrario á la Constitucion, que en su art. 23 entraña el espíritu de lenidad para con el delincuente, no responsable de algunos de aquellos delitos que la misma exceptúa de su consideracion; y ante ese Código que es la Suprema ley de la República á que todos los Jueces y Tribunales de cualquiera clase y categoría que sean deben ajustar sus procedimientos, son ineficaces las leyes en cuanto á él se oponen, y ningun valor

tienen tampoco prácticas ni contrarias opiniones, que solo tienden al sosten de las instituciones antiguas que aquel ha venido reformando, quitándoles lo deforme que en ellas imprimió la barbarie de los tiempos y acomodándolas al espíritu civilizador del siglo.

Que esto así, y toda vez que los hechos por los cuales Guerrero fué procesado, no implican insubordinacion, sino una falta de respeto á lo mas, agravada por la embriaguez y digna solo de una pena correccional, se debe estimar improcedente la que se le impuso; y de ser esto una verdad, tambien lo es que se ha violado en la persona del referido, la garantía consignada en el art. 23 de la Constitucion federal, al aplicársele la pena de muerte que no es la proporcional á dicha falta.

Que esa violacion es mas patente si se tiene en cuenta la incompetencia del Jurado, ya se derive esta de la naturaleza de los hechos que la Comandancia militar sometió al juicio de ese Tribunal, ya del fuero personal del quejoso en razon del tiempo en que aquellos tuvieron lugar. Que examinado este punto bajo el primer aspecto, la incompetencia no es dudosa, y al efecto de estimarlo así, basta considerar que no importando la materia de la causa un delito verdadero, se ha empleado para juzgar de ella, un procedimiento especial que no era acomodable al caso por salir de la esfera de lo correccional á que debió circunscribirse; y en cuanto á lo segundo, es necesario advertir, que aun en el supuesto de que se hubiera cometido un delito propiamente dicho, no incumbia al Jurado su conocimiento, toda vez que el procesado á la fecha de su perpetracion, había dejado de pertenecer al ejército, por la conclusion de su tiempo en el servicio de las armas; en cuya virtud y habiendo entrado el delito en esfera de los comunes, su conocimiento era exclusivo de los Tribunales del orden comun y no de los militares; pero contra todos estos principios, el Jurado ha enjuiciado al quejoso formalmen-

te, y de haberlo hecho así, se han violado en la persona de aquel las garantías consignadas en los arts. 13 y 14 de la Constitución, mediante los cuales nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

Considerando por último: que reclamada como ha sido la garantía que otorga el hombre el art. 5º constitucional, resulta acreditada su violación, porque sin el consentimiento ni la voluntad del quejoso, se le retiene en las filas del ejército después de cumplido el tiempo á que se le destinó, según se ve en la hoja de servicios relativa, con la circunstancia además, de haber pedido su baja cuando terminó su servicio, sin que se le haya dado en dos años cuatro meses diez días que han trascurrido desde entonces.

Por tales consideraciones y fundamentos y teniendo presente lo dispuesto en los arts. 101 y 102 de la Constitución general y ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez definitivamente juzgando, falla:

Primero: La Justicia de la Unión ampara y protege á Emigdio Guerrero, contra los procedimientos del Jurado militar de esta plaza, que habiéndolo juzgado por insubordinación lo condenó á la pena de muerte, violando de este modo en su persona las garantías que le otorgan los arts. 13, 14 y 23 de la misma ley fundamental.

Segundo: Ampara y protege así mismo al expresado, contra el acto de su retención forzada en el ejército.

Notifíquese esta sentencia al quejoso y al C. Promotor fiscal, y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia, sacándose previamente las copias prevenidas por la ley.

Así lo pronunció y firma el C. Juez: damos fé.—*P. Mendizabal Ortiz*.—una rúbrica.—De asistencia: *José M. Gonzalez*.—una rúbrica.—*Vicente Simancas*.—una rúbrica.

Es copia sacada fielmente de su original que certifico. H. Veracruz, Mayo 11 de

1874.—*P. Mendizabal Ortiz*.—De asistencia: *José M. Gonzalez*.—*Vicente Simancas*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 13 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el subteniente de Infantería de línea C. Julio N. Abdalá, en calidad de defensor del procesado Emigdio Guerrero, sargento 2º del batallón núm. 3, contra la sentencia de muerte á que lo condenó el Jurado militar de la plaza de Veracruz, por el delito de faltas de respeto á su superior inmediato, y contra su retención forzada en el servicio de las armas, supuesto que habiendo cumplido el término de su consignación, no se le dió de baja, á pesar de haberlo solicitado oportunamente; y con cuyos actos cree el promovente, que se han violado en la persona de su defendido, las garantías que otorgan los arts. 5º, 13, 14 y 23 de la Constitución de la República. Vistos los informes de la Comandancia militar y la sentencia del Juez de Distrito, dictada con fecha 8 de Mayo próximo pasado, con todo lo demás que de autos consta, y

Considerando: Que de los mismos autos aparece plenamente comprobada la violación de las garantías que ha designado el defensor de Emigdio Guerrero, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia mencionada del Juez de Distrito en que se otorga el amparo solicitado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos

Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 18 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, por el C. Victoriano Cepeda, contra los efectos de los decretos números 172 y 180 de la Legislatura del propio Estado, que lo destituyen del cargo de Gobernador.

EDICTAMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo ha venido al conocimiento del Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por recusacion del propietario y escusas de los dos suplentes del de Coahuila de Zaragoza, y como ya está resuelto el punto sobre suspension solicitada precisamente por el quejoso, se encuentra en estado de que el que suscribe, en ejercicio de su ministerio, pida lo conveniente en cuanto á lo principal.

El C. General Victoriano Cepeda, en su ocurso de 14 del pasado, solicita de la Justicia de la Union proteccion y amparo contra los decretos números 172 y 180 expedidos por la Legislatura de Coahuila, el uno en 10 de Setiembre de 1872 y en 5 de Junio el otro, por considerar que con ellos se violan en su perjuicio, las garantías individuales otorgadas en los arts. 13, 14 y 20 de la Constitucion federal de la República, en virtud de que por el primero de aquellos decretos se le destituye del cargo de Gobernador constitucional del Estado, de que estaba en ejercicio por el decreto de 26 de

Noviembre de 1871, y por el segundo, tácitamente se ratifica tal destitucion.

El que suscribe, considera, que para el fin principal que el quejoso se propone en su solicitud de amparo, es fuera del caso ocuparse de la cuestion que al principio de dicha solicitud se indica sobre si conforme á la Constitucion local de Coahuila, siete diputados forman legalmente *quorum* para expedir leyes y decretos, ó es preciso la concurrencia de ocho, cuya cuestion nace de la prevencion del art. 47 de la misma Constitucion, que exige para discutir y votar leyes, la presencia, por lo menos, de las dos terceras partes del número total de diputados de que se compone el Congreso, que es once; y por lo mismo, prescinde de su examen y pasa desde luego al de si en efecto han sido violadas ó no las citadas garantías, bajo el supuesto de que los siete diputados que expidieron el decreto número 172, tuvieran capacidad legal para hacerlo, funcionando como verdadero Congreso.

Esto dicho, y siendo así que la destitucion de un funcionario público del cargo que desempeña, no puede tener otro carácter que el de una pena impuesta por faltas ó delitos que haya cometido, es evidente que aquella solo puede decretarse por la autoridad á quien se haya cometido la facultad de hacerlo, por alguna ley promulgada con anterioridad á los hechos cuyo castigo se pretenda.

El art. 113 de la Constitucion de Coahuila, previene: que de los delitos oficiales cometidos por los funcionarios de primer orden, (de los cuales el Gobernador es uno) conozca el Congreso como jurado de acusacion, y el Supremo Tribunal de Justicia como jurado de sentencia: á esta disposicion debió sugetarse el Congreso de Coahuila, tratándose de exigir la responsabilidad al Sr. Cepeda por los delitos que le imputara, supuesto que en ella se establece el Tribunal que debiera castigarlo, en caso de ser declarado culpable por el jurado de acusacion; pero segun se ha visto antes, el Con-